

TERRORISMO DE ESTADIO

PRISIONEROS DE GUERRA EN UN CAMPO DE DEPORTES

Segunda edición ampliada



Pascale Bonnefoy Miralles



EDITORIAL
LATINOAMERICANA

Proyecto financiado por
el Fondo Nacional de
Fomento
del Libro y la Lectura,
convocatoria 2016



Consejo
Nacional de
la Cultura y
las Artes

Fondo Nacional de
Fomento del Libro
y la Lectura

Gobierno de Chile

Nota de la autora

El 26 de diciembre de 2002 murió en Concepción el coronel en retiro del Ejército, Jorge Espinoza Ulloa, comandante del Estadio Nacional cuando se convirtió en el más grande campo de detención en la historia de Chile desde el mismo día del golpe de Estado, 11 de septiembre de 1973, hasta el 9 de noviembre de ese año.

Meses antes, el coronel Espinoza me había llamado para decirme, amablemente, que no quería hablar, que no tenía nada que comentar. Llamaba, aclaró, sólo por deferencia a un viejo amigo, un oficial de Ejército en retiro que había actuado como intermediario. Me negó una entrevista para la primera edición del libro. Antes de que pudiera hacer otro intento, ya había fallecido.

A la justicia chilena nunca contó todo lo que sabía de lo sucedido en el Estadio Nacional. En realidad, hasta que el juez Juan Guzmán Tapia lo interrogó en mayo de 2002 respecto del asesinato del estadounidense Charles Horman, ningún magistrado le había preguntado nada. Negó los crímenes hasta su muerte.

Cuando la Junta Militar presidida por el general Augusto Pinochet se apoderó del país, desató una furibunda, masiva razia en contra de la población civil, chilena y extranjera. De inmediato se habilitaron dos grandes centros de detención: el Estadio Chile, hoy rebautizado Estadio Víctor Jara, y el Estadio Nacional en la comuna de Ñuñoa. El Estadio Chile fue evacuado a los cinco días y la mayoría de los detenidos, así como sus custodios militares, fueron trasladados al Estadio Nacional.

Inicié la investigación para la primera edición de este libro en 2002, al darme cuenta de lo poco que se sabía sobre el Estadio Nacional como campo militar. De los órganos represivos DINA y CNI y sus centros clandestinos de prisión y tortura se conocían los nombres de al menos sus capas superiores, sus brigadas, agentes y operaciones. Sin embargo, del Estadio Nacional, un recinto emblemático de la capital convertido en una gigantesca cárcel para presos políticos, solo estaban los conmovedores testimonios personales de algunos detenidos.

Pero, ¿quiénes eran los militares que tuvieron a su cargo a miles de prisioneros en el principal coliseo del país? ¿De dónde venían? ¿Cómo se organizó ese aparato represivo? ¿Qué pasó adentro? ¿Quién hizo qué y cómo? ¿Quiénes eran los interrogadores y cuál era la cadena de mando? ¿Cómo se decidía el destino de los detenidos? ¿Dónde fueron a parar esos militares y los expedientes de esa etapa inicial de represión política?

La primera edición de *Terrorismo de Estadio. Prisioneros de Guerra en un Campo de Deportes*, publicada en 2005, fue un esfuerzo por responder a esas preguntas. Esta segunda edición es sustancialmente distinta, gracias a un nuevo universo de fuentes, información y documentos como resultado de una década de investigaciones judiciales y periodísticas.

De partida, pude identificar al Estado Mayor que operó en el Estadio Nacional, a las jefaturas intermedias, jefes de tropa y suboficiales. También logré desentrañar en buena medida el aparato de inteligencia, la cadena de mando y el proceso de toma de decisiones respecto de los detenidos. Identifiqué al jefe del “Servicio de Interrogadores de las Fuerzas Armadas y Carabineros del Estadio Nacional”, al jefe de los interrogadores del Ejército, al que llamaba por alto parlantes a los detenidos a interrogatorios, y al encargado de escoltarlos hacia la tortura, el mismo que hasta julio de 2016 se desempeñó como edecán de la Cámara de Diputados. Revelo los nombres de los interrogadores de varias instituciones armadas y las circunstancias y las contradicciones en torno a ejecuciones y supuestos suicidios, muertes por enfermedad o intentos de fuga.

Por el Estadio Nacional pasaron miles de hombres, mujeres, menores de edad y ancianos, chilenos y extranjeros, incomunicados sin ninguna acusación formal. Obreros, profesionales, campesinos, intelectuales, estudiantes, artistas, dirigentes políticos, militantes y no militantes, turistas, delincuentes, diplomáticos, dueñas de casa. Por días, semanas o meses. Ejecutados, desaparecidos y sobrevivientes. Torturados, adoloridos, hambrientos, heridos de cuerpo y alma. Con la incertidumbre y el temor de no saber qué pasaría el día siguiente, la hora siguiente. Algunos sin entender por qué estaban ahí, y sin jamás haber concebido el nivel de brutalidad al que llegarían a ejercer los vencedores sobre ellos, los “prisioneros de guerra”. Sufrieron una violencia y denigración constante, arbitraria y cruel, desde el trato cotidiano hasta las salas de tortura. En todos ellos se anidaría para siempre el dolor, al igual que la profunda solidaridad que nace de situaciones extremas.

No se sabe con exactitud cuántos prisioneros murieron bajo tortura, fueron ejecutados en el lugar, o sacados del estadio para ser fusilados. Según el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, serían 41, y a ellos se pueden agregar cuatro confirmados a través de otras fuentes. Sin embargo, de acuerdo a los testimonios de prisioneros y de los propios militares, podrían ser decenas más. Desaparecidos después de su arresto, sus cadáveres aparecieron en una calle, un río, en algún sitio eriazo de la capital, en la morgue, o muchos años después, en el Patio 29 del Cementerio General. Otros siguen desaparecidos. ¿Dónde estuvieron entre su detención y la muerte? ¿Quiénes y por qué los ultimaron, tirando sus restos como desperdicio por la ciudad? Tal vez nunca se sabrá.

Tampoco existen cifras precisas del número total de detenidos que permanecieron en el Estadio Nacional en sus dos meses de operación. Las cifras oficiales de la Junta Militar dieron cuenta de cerca de siete mil. De acuerdo a la lista publicada en 2000 por el ex director de la DINA Manuel Contreras en su libro *La verdad histórica* (sic), fueron casi nueve mil. Sin embargo, los ex detenidos concuerdan que el número total fácilmente podría alcanzar el doble.

A 43 años de los hechos, son pocos los protagonistas militares y colaboradores civiles los dispuestos a revelar sus secretos. Mayor hermetismo aún ha envuelto las identidades de los militares y civiles enviados por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones a hacerse cargo de los interrogatorios. Muchos de ellos, fogueados tanto en el Estadio Chile como en el Estadio Nacional, se pasaron después a la DINA.

Se escudan en un distorsionado sentido de honor y lealtad militares, temerosos de ver desplomar la red de complicidad que les ha asegurado no sólo su impunidad judicial, sino también mantener su nombre limpio en su entorno familiar, social y profesional.

Algunos oficiales con quienes conversé dijeron no haber estado nunca dentro del estadio, a pesar de haber sido reconocidos ahí por prisioneros y por sus propios camaradas de armas. Quienes debieron forzosamente admitir su participación en interrogatorios, como el reservista naval Emilio Meneses Ciuffardi, insisten en la escena de una cordial entrevista alrededor de un escritorio, donde sólo faltaba el café.

Y muchos, demasiados, dijeron que sólo se encargaban del papeleo, repartían frazadas a los detenidos, los distribuían en camarines, los cuidaban, vigilaban y alimentaban: un ejército de oficiales sordos, ciegos y mudos, absolutamente carentes de cualquier poder de decisión y sólo preocupados del bienestar material de los prisioneros.

De igual manera se lavaron las manos los oficiales del Centro Coordinador de Detenidos que operaba desde el Ministerio de Defensa, partiendo por su jefe, el general de la Fuerza Aérea, Francisco Herrera Latoja. También se produjeron reacciones curiosas, como la del brazo derecho del coronel Espinoza y primer jefe de la Sección Extranjería del Estadio Nacional, el general en retiro Carlos Meirelles Müller, quien rechazó reiteradas solicitudes de

una entrevista para la primera edición del libro con la excusa: “Tengo la conciencia tranquila”. Para la segunda edición, ya había fallecido.

Uno de los jefes de seguridad, el general en retiro Hernán Chacón Soto, se negó a hablar, mandando recado a través de su esposa de que no tenía idea de qué estadio le hablaba. Hoy está procesado por su participación en crímenes tanto en el Estadio Chile como el Nacional. El oficial de inteligencia Oziel Severino fue más directo al rechazar una entrevista para este libro: “Tengo 80 años y no puedo ni quiero recordar,” me dijo.

En cambio, hubo otros que hablaron con candidez, entre ellos el ex teniente de Ejército Fernando Daguerressar, quien partió diciendo: “No tengo por qué esconder nada”. Otros, como los ex oficiales del Servicio de Inteligencia Militar, Jaime Ortiz y Raúl Meneses, aceptaron sin trabas largas entrevistas.

Paradojalmente, algunos de quienes ayudaron a los detenidos y no comulgaron con los métodos represivos del nuevo régimen no quieren ahora hablar de su actuación para no caer en desgracia ante sus compañeros de armas que aún se jactan de su victoria sobre una población indefensa.

Hubo, de hecho, no pocos militares que se pusieron al lado de los detenidos, aunque no siempre pudo ser muy evidente. Muchos conscriptos, jóvenes de sólo 18 años, les llevaban comida y recados desde afuera; algunos se conmovieron hasta las lágrimas con la suerte de los prisioneros. Otros fueron severamente castigados al ser sorprendidos tratando de ayudarlos. Otros “pelados” tenían padres, hermanos y amigos presos en el mismo lugar que debían vigilar, un drama que marcó sus vidas para siempre.

También hubo suboficiales, tenientes, capitanes y mayores indignados por los métodos y el tratamiento dado a los “prisioneros de guerra”, y entablaron relaciones de respeto con ellos, en un esfuerzo por hacer su tragedia un poco más soportable. Algunos derechamente movieron piezas para ayudar a conseguir su libertad, otorgarles un trato más humanitario, atender sus necesidades e incluso evitar la tortura. Varios de ellos cayeron en desgracia y fueron expulsados o debieron dejar su institución poco después. Algunos han preferido el anonimato.

Para los ex detenidos, repasar y revivir esta historia, en la mayoría de los casos, ha sido complejo, doloroso, e incluso, a veces, humillante. La memoria se tiende a diluir, a veces confundir, y los años de fortificación de la caja negra del recuerdo a menudo no dejan reflotar las experiencias más traumáticas. Pero en ningún caso esto sirvió de pretexto para negarse al ejercicio de la memoria. Es más, era imperativo hacerlo. Para algunos era la primera vez.

Un par de ellos prefirieron el anonimato. Aún llevan el estigma de haber sufrido la prisión, la tortura, la denigración y la derrota, debiendo ocultar sus rostros mientras sus victimarios continúan su vida habitual, sin siquiera reconocer responsabilidades.

Cuando investigaba para la primera edición del libro, había una sola causa judicial en torno a un crimen cometido en el Estadio Nacional: las muertes de los norteamericanos Charles Horman y Frank Teruggi, investigado primero por el ministro Juan Guzmán y después por Jorge Zepeda. Hoy las causas superan la docena.

Tuve acceso a nueve de ellas, algunas de manera parcial. También obtuve 14 sumarios del Segundo Juzgado Militar de Santiago de 1973. Forman parte de las casi mil causas de las fiscalías militares de 1973 que el Ejército alega perecieron en un atentado incendiario a la Escuela de Educación Física del Ejército, donde habían sido archivados, el 14 de noviembre de 1989, casualmente justo al finalizar la dictadura militar. En 2011 solicité al Segundo Juzgado Militar de Santiago el desarchivo de la causa N° 1710-89 sobre ese atentado incendiario para ver de qué se trataba; esperé en vano durante meses. El 8 de marzo de 2016 volví a pedirla, esta vez a través de la Ley de Transparencia. Seis meses después, sigo esperando.

Batallé con el dilema ético y legal de utilizar información de sumarios aún en curso e identificar a los declarantes. En algunos casos pedí autorización para reproducir parte de sus declaraciones. En otros los llamé para que me contaran directamente. En no pocos casos esos testigos ya han fallecido.

Tomé dos decisiones respecto del uso de los expedientes. La primera, en relación a las causas aún abiertas, es que hay un bien superior y un interés público de conocer la verdad sobre crímenes que aún no han sido plenamente investigados y sancionados a pesar de los 43 años transcurridos desde que se cometieron. Eso es demasiado tiempo y el reloj biológico avanza raudamente. Los familiares de víctimas están falleciendo sin alcanzar la verdad o la justicia, mientras que quienes pudieran ayudar a esclarecer los hechos y traer algo de paz a esas familias han preferido llevarse todo a la tumba. La verdad judicial tarda, las causas se estancan, los sumarios se cierran.

La gran mayoría de los militares, enfrentados a la justicia, tienen mala memoria, no vieron ni supieron nada, mienten, se contradicen entre ellos y a sí mismos y algunos niegan hasta su propia firma. Están preocupados. Han debido ir a declarar ante un juez una y otra vez. Recién están saliendo a la luz sus nombres. Algunos han sido procesados y están indignados, sintiéndose víctimas de una injusticia al ser acusados de crímenes en los cuales no participaron directamente. ¿Tuvieron alternativa? Tal vez los conscriptos no. Los suboficiales, oficiales, reservistas, médicos y civiles que formaron parte del engranaje represivo sí tuvieron opción. Aunque su decisión fuese quedarse adentro y en silencio, no se justifica moralmente que, más de cuatro décadas después, mantengan tanto secreto guardado, encubriendo los crímenes y prolongando la crueldad para quienes siguen esperando respuestas.

En la balanza entre conocer trozos de nuestra propia historia, de manera extremadamente tardía, y proteger el secreto impuesto por un anticuado sistema judicial en vías de extinción, primó lo primero.

La segunda decisión es en relación a los sumarios de las fiscalías militares en 1973. Esos escuálidos expedientes, esas muecas de investigación superficial, incluyen los informes de los interrogatorios a los detenidos en el Estadio Nacional. Algunos de estos informes son breves y no comprometedores. Otros llenan varias hojas de datos, detalles, nombres, lugares, trayectorias y experiencias políticas y militares. No quiero imaginarme el nivel de torturas que permitió extraer esa cantidad de información a un prisionero. En ningún caso es válida la información arrancada bajo tortura, y por ello y por respeto a las víctimas de la tortura, en este libro no cito ni utilizo sus supuestas declaraciones durante los interrogatorios, con una sola excepción en el Capítulo 14, “Boinas Negras”.¹

Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que me regalaron su tiempo, testimonios y recuerdos, y que pueblan estas páginas, y a quienes con sus sugerencias, conocimientos y ayuda de toda índole contribuyeron de distintas maneras a la investigación y la preparación de las dos ediciones de este libro, particularmente a:

Felipe Agüero, Carlos Capelán, Hebert Corbo, John Dinges, Sergio Fernández, Ximena George-Nascimento, Víctor Herrero, Joyce Horman, Peter Kornbluh, Familia Lavanderos Lataste, Ramón Maldonado, Clara Malhue, Pedro Alejandro Matta, Hernán Medina, Jorge Montealegre, Bengt Oldenburg, Guillermo Orrego, Carmen Luz Parot, Hugo Pavez, Patricio Polanco, Carolina Pradenas-Hultgren, Enrique Sandoval, Jan Sandquist, Jorge Silva, María Emilia Tijoux, Carlos Vergara, Fernando Villagrán, y a aquellos ex oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros que prefieren mantener sus nombres en reserva.

¹ La declaración de Leonardo Schneider Jordán, militante del MIR devenido en agente del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea.

Valoro la ayuda del equipo humano de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, así como la buena disposición de los funcionarios del Archivo Nacional Administrativo de la DIBAM y del Archivo General Histórico de la Cancillería. Agradezco enormemente a Martín Abregú, en la Fundación Ford en Santiago, y a John Hyde, del Fund for Investigative Journalism en Washington, D.C., por la cooperación que hizo posible la primera edición, y a Julio Silva Solar, entonces director de Ediciones CESOC, por su convencimiento de que hay sucesos en la historia que había que dejar plasmados en papel, independientemente de su potencial rentabilidad.

Para esta segunda edición, van agradecimientos especiales a Angel Spotorno Lagos, director de la Editorial Latinoamericana, por proponerme re-editar este libro, su paciencia para esperar un manuscrito que parecía no tener nunca un fin, y su eterna amistad, al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por el financiamiento aportado, y a la periodista y Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, María Olivia Mönckeberg, por su minuciosa revisión del texto y valiosos comentarios.

PASCALE BONNEFOY M.

Septiembre 2016

Santiago de Chile

ANEXO I

Ejecutados y desaparecidos del Estadio Nacional

Luis Porfirio Alzamora González

21 años, empleado. Fue detenido el 21 de septiembre por Carabineros de la Comisaría Dávila y llevado a ese recinto, siendo trasladado esa tarde al Estadio Nacional. Fue ejecutado el 22 de septiembre.

Juan Carlos Ampuero Gómez

26 años, empleado, militante del Partido Socialista. Fue detenido el 15 de octubre por carabineros junto con el argentino Óscar Bugallo Celuzi en el centro de Santiago y trasladado al Estadio Nacional. Fue ejecutado el 17 de octubre y su cuerpo fue encontrado frente al Templo Votivo de Maipú junto al de Bugallo. Fue enterrado en el Patio 29 del Cementerio General. Su familia no recuperó sus restos.

Manuel Jesús Arancibia Arancibia

29 años, comerciante ambulante. Fue detenido el 16 de septiembre por efectivos de la Fuerza Aérea en la población La Legua y trasladado al Estadio Nacional. Fue sometido a un Consejo de Guerra y fusilado el 26 de septiembre en la Escuela de Suboficiales de Carabineros.

Guillermo Jesús Arenas Díaz

25 años, contador, militante del Partido Socialista. Fue detenido por militares el 11 de septiembre en su lugar de trabajo, la Sociedad Comercializadora de la Reforma Agraria. Fue trasladado primero al Estadio Chile y luego al Estadio Nacional, desde donde desapareció.

Jorge Ávila Pizarro

27 años, médico cirujano, militante del MIR. Quedó detenido el 17 de septiembre al presentarse voluntariamente en la Novena Comisaría de Santiago y trasladado al Estadio Nacional. Fue ejecutado el 18 de septiembre y enterrado en el Patio 29 del Cementerio General.

Amalindo del Carmen Beíza Beíza

57 años, obrero municipal, simpatizante del Partido Socialista. Fue detenido el 17 de septiembre por oficiales de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue y llevado a esa unidad militar. Fue trasladado al Estadio Nacional el 19 de septiembre y sacado del recinto esa misma noche para ser ejecutado en la rotonda Grecia.

Óscar Héctor Bugallo Celuzi

Argentino, 24 años. Fue detenido el 15 de octubre por carabineros junto con Juan Carlos Ampuero Gómez y trasladado al Estadio Nacional. Fue ejecutado el 17 de octubre y su cuerpo fue encontrado frente al Templo Votivo de Maipú junto al de Ampuero. Sus restos fueron repatriados a Argentina en noviembre de 1973.

Guillermo del Carmen Bustamante Sotelo

39 años, obrero agrícola. Fue detenido por Carabineros de Isla de Maipo el 14 de septiembre en Talagante y trasladado al Estadio Nacional, desde donde desapareció.

Manuel Beltrán Cantú Salazar

36 años, profesor, asesor de la Intendencia de Santiago; miembro del Partido Socialista. Fue detenido por Carabineros el 16 de septiembre y trasladado al Estadio Nacional. Fue ejecutado el 18 de septiembre.

Mario Antonio Castañeda Escobar

51 años, electricista. Fue detenido por carabineros el 23 de septiembre, llevado a la comisaría policial y posteriormente al Estadio Nacional. Fue sacado del lugar y ejecutado en el puente Bulnes el 24 de septiembre.

Luis Alberto Corvalán Castillo

28 años, ingeniero agrónomo, militante del Partido Comunista. Fue detenido el 14 de septiembre y llevado al Estadio Nacional. Murió el 26 de octubre de 1975 en el exilio en Bulgaria, como consecuencia directa de las torturas sufridas durante su detención.

Florencio Esteban Cuéllar Albornoz

21 años, comerciante ambulante. Fue detenido el 13 de octubre por una patrulla militar en la comuna de La Granja y llevado al Estadio Nacional. Al día siguiente, fue sacado del recinto y ejecutado en el puente Bulnes.

Luiz Carlos De Almeida

Brasileño, profesor de física de la Universidad Técnica del Estado; militante del PC de Brasil. Detenido el 14 de septiembre por carabineros y trasladado al Estadio Nacional. Al día siguiente, fue sacado por una patrulla militar junto a otros dos extranjeros y ejecutado en la ribera del río Mapocho.

Wânio José de Mattos Santos

Brasileño, 47 años, abogado y ex capitán de la Policía Militar de São Paulo. Murió el 16 de octubre en el hospital de campaña del Estadio Nacional de peritonitis aguda al serle negada atención médica oportuna.

Oscar Jesús Delgado Marín

30 años, ex boina negra de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue; militante del MIR. Fue detenido el 4 de octubre, trasladado al Estadio Nacional y ejecutado al día siguiente. Fue enterrado en el Patio 29 del Cementerio General y sus restos fueron exhumados e incinerados en 1981.

Sergio Alberto Gajardo Hidalgo

15 años, estudiante. Fue detenido el 12 de septiembre en la calle en la comuna de Ñuñoa. Fue reconocido como detenido en el Estadio Nacional por funcionarios de la Cruz Roja Internacional, pero nunca figuró en la lista de detenidos de ese recinto. Su cuerpo fue encontrado en el canal San Carlos. Ingresó a la morgue como NN y se mantuvo en calidad de desaparecido hasta 1991, cuando sus restos fueron exhumados del Patio 29 del Cementerio General.

Carlos Ramiro González González

Boliviano, 18 años, estudiante universitario. Fue detenido con un primo el 15 de septiembre en el centro de Santiago y visto en el Estadio Nacional. Se mantuvo en calidad de desaparecido hasta 1991, cuando sus restos fueron exhumados del Patio 29 del Cementerio General.

Charles Edmund Horman Lazar

Estadounidense, 31 años, cineasta y periodista. Fue detenido el 17 de septiembre por una patrulla militar y ejecutado en el Estadio Nacional al día siguiente.

Óscar Antonio Lobos Urbina

24 años, obrero. Fue detenido el 15 de septiembre por efectivos de la Fuerza Aérea en la población La Legua y trasladado al Estadio Nacional. Fue sometido a un Consejo de Guerra y fusilado el 26 de septiembre en la Escuela de Suboficiales de Carabineros.

Víctor Joaquín Maldonado Gatica

21 años, estudiante, militante del MIR. Fue detenido el 17 de septiembre en Lampa por efectivos del Regimiento de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue y llevado a ese recinto militar. El 19 de septiembre fue trasladado al Estadio Nacional y sacado esa misma noche para ser ejecutado en la rotonda Grecia.

Luis Sergio Méndez Ortega

25 años, mecánico. Fue detenido el 21 de septiembre por carabineros de la Comisaría Dávila y llevado a ese recinto y luego al Estadio Nacional. Fue ejecutado el 22 de septiembre.

Jaime Pablo Millanao Caniuhuan

24 años, obrero textil, militante de las Juventudes Comunistas. Fue detenido el 23 de septiembre por una patrulla militar desde la Planta Química de la Industria Yarur. Fue visto en el Estadio Nacional por un familiar. Fue ejecutado en la vía pública el 25 de septiembre y su cuerpo enterrado en el Patio 29 del Cementerio General.

Ramón Augusto Muñoz Miranda

25 años, obrero agrícola. Fue detenido el 12 de septiembre por carabineros de la Tenencia Vista Alegre de Cerrillos y trasladado a esa unidad policial. El 14 de septiembre fue llevado al Estadio Nacional y ejecutado esa tarde.

Eloy Emilio Núñez González

35 años, portero; dirigente de las JAP; militante del Partido Socialista. Fue detenido el 17 de septiembre por carabineros de la entonces Décimo Cuarta Comisaría de Providencia y trasladado al Estadio Nacional, donde fue ejecutado el 21 de septiembre. Su cuerpo fue encontrado en la vía pública.

Dante Valentín Olivares Jiménez

36 años. Detenido el 20 de septiembre por militares y policías durante un allanamiento a la población La Bandera y trasladado al Estadio Nacional. Fue ejecutado el 21 de septiembre y su cuerpo fue encontrado en la vía pública.

Juan Miguel Órdenes Simón

20 años, obrero agrícola, militante del MIR. Fue detenido con su hermano el 17 de septiembre en Lampa por efectivos del Regimiento de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue y llevado a ese recinto militar. Fue trasladado al Estadio Nacional el 19 de septiembre y esa noche fue sacado junto a otros detenidos y ejecutado en la rotonda Grecia.

Paulino Ernesto Órdenes Simón

21 años, obrero agrícola, militante del MIR. Fue detenido con su hermano el 17 de septiembre en Lampa por efectivos del Regimiento de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue y llevado a ese recinto militar. Fue trasladado al Estadio Nacional el 19 de septiembre y esa noche fue sacado junto a otros detenidos y ejecutado en la rotonda Grecia.

Luis Alberto Ortega Fernández

31 años, empleado. Fue detenido el 21 de septiembre por carabineros de la Comisaría Dávila y llevado a ese recinto, siendo trasladado esa tarde al Estadio Nacional. Fue ejecutado el 22 de septiembre.

Juan Oyarce

51 años, tesorero del Sindicato de Suplementeros, militante del Partido Socialista. Fue detenido el 11 de septiembre y recluido en los estadios Chile y Nacional. Liberado del Estadio Nacional el 27 de septiembre, murió al día siguiente a causa de una anemia aguda y hemorragia digestiva producidas por las torturas.

Ricardo Guillermo Pardo Tobar

28 años, ex instructor de boinas negras de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue; militante del MIR. Fue detenido el 10 de octubre en su domicilio en Maipú por agentes del Servicio de Inteligencia Militar y llevado al Estadio Nacional. Fue ejecutado ese mismo día y enterrado en el Patio 29 del Cementerio General.

Sergio Orlando Peralta Martínez

39 años, topógrafo, asesor de la Intendencia de Santiago. Miembro del Partido Socialista. Fue detenido el 16 de septiembre por efectivos de la Fuerza Aérea y ejecutado el 18 de septiembre. Su cuerpo apareció en la vía pública. No existe confirmación plena de que estuvo en el Estadio Nacional, pero se puede concluir que siguió el mismo trayecto de otro asesor de la Intendencia y militante socialista, Manuel Cantú, arrestado ese mismo día y llevado al estadio. Según sus informes de autopsia, ambos fueron ejecutados el mismo día y a la misma hora y llegaron juntos a la morgue.

Pedro Hugo Pérez Godoy

15 años, estudiante de enseñanza básica. Fue detenido por Carabineros el 17 de octubre en horas del toque de queda y trasladado al Estadio Nacional, lugar donde fue visto por última vez en noviembre. Se mantuvo en calidad de desaparecido hasta 1991, cuando sus restos fueron exhumados del Patio 29 del Cementerio General.

Amado de Jesús Ríos Pradena

31 años, comerciante. Fue detenido el 15 de septiembre por efectivos de la Fuerza Aérea en la población La Legua y trasladado al Estadio Nacional. Fue sometido a un Consejo de Guerra y fusilado el 26 de septiembre en la Escuela de Suboficiales de Carabineros.

Hugo Manuel Rojas Cortés

35 años, obrero de la empresa Lucchetti. Fue detenido durante un allanamiento a la empresa el 13 de septiembre y enviado al Estadio Chile y luego al Estadio Nacional. Murió en el Estadio Nacional el 3 de octubre. Según el jefe del campo, se ahorcó en el baño. De acuerdo al informe de autopsia, murió de una bronconeumonía. El Informe Rettig señala que su muerte se debió a las torturas que sufrió.

Luis Alfredo Rojas González

36 años, obrero. Fue detenido el 14 de septiembre y trasladado al Estadio Nacional. Fue ejecutado ese mismo día.

Miguel Román Román

41 años, Comerciante. Se desconocen las circunstancias de su detención. Murió en el Estadio Nacional el 6 de octubre en la mañana debido a una “asfixia por ahorcamiento”, según su informe de autopsia. Fue sepultado en el Patio 29 del Cementerio General. No ha sido calificado como víctima de violaciones a los derechos humanos por las comisiones oficiales.

Jorge Carlos Romualdo Ruz Zúñiga

26 años, ingeniero hidráulico. Fue detenido el 20 de septiembre por militares del Regimiento Guardia Vieja de Los Andes durante un allanamiento a la Planta Sercotec de Maipú. Fue llevado al recinto FISA y luego al Estadio Nacional. Esa misma noche fue sacado junto a un grupo de prisioneros y ejecutado en la ribera del Río Maipo. Su cuerpo fue exhumado del Patio 29 del Cementerio General en 1991.

Enrique Antonio Saavedra González

Boliviano. 18 años, estudiante universitario. Fue detenido con un primo el 15 de septiembre en el centro de Santiago. Fue visto en el Estadio Nacional. Su cuerpo fue exhumado del Patio 29 del Cementerio General en 1991.

Carlos Helen Salazar Contreras

46 años, abogado y profesor, militante del Partido Socialista. Fue detenido el 5 de octubre en por detectives de la Policía de Investigaciones y trasladado al Estadio Nacional. Murió el 11 de octubre. Según la versión oficial, fue un suicido.

Juan de Dios Salinas Salinas

29 años, obrero agrícola. Fue detenido por carabineros de Isla de Maipo el 14 de septiembre en Talagante y trasladado al Estadio Nacional, desde donde desapareció.

Antonio Artemio Tamayo Reyes

31 años, empleado. Fue detenido el 21 de septiembre por carabineros de la Comisaría Dávila y llevado a ese recinto, siendo trasladado esa tarde al Estadio Nacional. Fue ejecutado el 22 de septiembre.

Frank Randall Teruggi Bombatch

Estadounidense, 24 años, estudiante universitario. Fue detenido el 20 de septiembre en su domicilio por carabineros de la Escuela de Suboficiales de Macul, siendo trasladado a esa unidad y luego al Estadio Nacional. Fue ejecutado el 22 de septiembre.

José Fernando Torres Arenas

25 años, inspector de la Dirección de Industria y Comercio. Fue detenido en su domicilio el 16 de septiembre por carabineros y trasladado al Estadio Nacional. Fue ejecutado el 18 de septiembre.

Juan José Valdebenito Miranda

26 años, desabollador de autos, militante del Partido Comunista. Fue arrestado el 20 de septiembre en la población La Bandera en un operativo conjunto del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros. Traslado al Estadio Nacional, fue ejecutado esa misma noche en la vía pública. Permaneció en calidad de detenido desaparecido hasta 1991, cuando se exhumaron sus restos en el Patio 29 del Cementerio General.

Nilson Hernando Vallejos Aguilera

27 años, estudiante y profesor, militante de las Juventudes Comunistas. Detenido el 20 de septiembre por carabineros de la Séptima Comisaría y trasladado al Estadio Nacional. Esa noche fue sacado con un grupo de prisioneros y ejecutado en la ribera del Río Maipo. Su cuerpo fue enterrado en el Patio 29 del Cementerio General.

TOTAL: 45

Fuentes:

- Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, “Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, Reedición, Santiago, diciembre 1996.
- Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, “Informe sobre calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos y de la violencia política”, Santiago, septiembre 1996.
- Proyecto Memoria Viva, www.memoriaviva.com
- Manuel Contreras Sepúlveda, “La Verdad Histórica, el Ejército Guerrillero”, Ediciones Encina, Santiago, 2000.
- Libro de ingreso de fallecidos al Instituto Médico Legal, octubre 1973, Proyecto ArchivosChile, www.archivoschile.org.